



FACULTAD DE DERECHO

BOGOTÁ D.C. AÑO DE ELABORACIÓN: 2014

TÍTULO: DEL DELITO DE INJURIA Y CALUMNIA CAUSADO POR PERIODISTAS. UN ANÁLISIS JURÍDICO Y JURISPRUDENCIAL DE LA DIFICULTAD DE PROBARLO POR SU "FUERO ESPECIAL".

AUTOR (ES): **SANABRIA MARANTA JAIME ORLANO**

DIRECTOR / ASESOR: **RODRIGUEZ SANABRIA VLADIMIR**

MODALIDAD:

PAGINAS: ☒ **TABLAS:** ☐ **CUADROS:** ☐ **FIGURAS:** ☐ **ANEXOS:** ☐

CONTENIDO:

- 1 INTRODUCCIÓN
- 2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
- 3 OBJETIVOS
- 4 DEL DELITO DE INJURIA Y CALUMNIA
- 5 DE LOS BIENES JURIDICOS TUTELADOS
- 6 DE LA PRUEBA EN LOS DELITOS DE INJURIA Y CALUMNIA
- 7 EXCEPCIÓN PROBATORIA "EL FUERO ESPECIAL DEL PERIODISTA
- 8 ANÁLISIS JURÍDICO Y JURISPRUDENCIAL COLOMBIANO SOBRE LA NECESIDAD DE LA PRUEBA PARA ESTABLECER LA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE INJURIA Y CALUMNIA CUANDO SON COMETIDOS POR PERIODISTAS
- 9 CONCLUSION
- 10 BIBLIOGRAFÍA
- 11 ANEXOS

PALABRAS CLAVES: **INVESTIGACION JURISPRUDENCIA ANALISIS**

DESCRIPCIÓN: Este proyecto está enfocado a efectuar un análisis jurídico jurisprudencial de la dificultad de probar el delito de injuria y calumnia cometido por periodistas los cuales gozan de un fuero especial, que se convierte en una herramienta para dificultar los medios de prueba de comisión del delito,



Evidenciando una serie de vacíos jurídicos, que no permiten establecer la verdadera capacidad de mantener en una balanza la libertad de prensa y los derechos contenidos en la Constitución.

METODOLOGÍA: EL PRESENTE TRABAJO FUE DESARROLADO BAJO UN ESQUEMA INVESTIGATIVO Y ANALITICO, BASADO EN LOS ULTIMOS PRONUNCIAMIENTOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.

CONCLUSIONES: Uno de los grandes conflictos se encuentran relacionados entre el derecho a la información y los derechos a la honra, el buen nombre y la intimidad, sin embargo, este estudio ha podido demostrar que en el caso de las personas y los hechos de importancia públicos, predomina prima facie el primero.

En estos eventos, el derecho de información debe ser preferido, en razón del papel de control del poder que se asigna socialmente a los medios de comunicación. Del reconocimiento de que los medios cumplen en este campo una función importante para la vigencia del sistema democrático se deriva que ellos deben gozar de amplia libertad en la tarea de supervisión de las entidades estatales y de los poderes privados.

Se establece que el interés general prima sobre el particular y que a pesar de que existan los argumentos para condenar los causantes de vulneraciones contra la dignidad humana, no se puede imponer restricciones sobre la prensa, ya que perjudicaría en medida notable su capacidad de vigilancia sobre el correcto desempeño de estos poderes.

No desconoce la Corte Constitucional que la referida amplitud de la libertad de prensa en estos campos puede llegar a afectar los derechos de las personas que se desempeñan en posiciones de notoriedad e interés público. No obstante, en principio habrá de responderse que estas personas, al aceptar su situación social, han consentido una cierta restricción de esos derechos. En efecto, su papel de figuras públicas los convierte en objeto del interés general, por lo cual es de esperar que tanto sus actividades públicas como su vida privada sean observadas de manera minuciosa por parte de la sociedad.

La experiencia y la jurisprudencia han logrado determinar que la trascendencia del derecho a la libertad de expresión, al igual que a la información y opinión ejercidas



por los medios de comunicación o a través de ellos, no puede ser matizada, pues son parte esencial de la democracia, así como pilar del desarrollo individual de cada persona.

En sus pronunciamientos, la Corte ha indicado con respecto a este punto que "Los medios de comunicación tienen un impacto determinante en la difusión de opiniones e informaciones en la sociedad, que hace de su actividad un componente fundamental de la democracia ya que contribuyen a la formación de la opinión pública, al funcionamiento del sistema político, promueven el pluralismo, la libertad de pensamiento y expresión, y favorecen el control sobre los poderes públicos y privados facilitando el debate libre y abierto entre los diversos sectores de la comunidad y la aproximación a diversas visiones de mundo"

Así mismo, se puede evidenciar que este conflicto surge a nivel mundial, ya que no solo se vive en Colombia, sino que todos los países están integrados por comunidades que hacen valer sus derechos y que desean que se demuestren los resultados por parte de sus gobernantes o que por el contrario sean condenados y reemplazados, para que puedan dar paso a mejores opciones en el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

No obstante, este sin número de casos no tendría razón de ser si no existieran los medios de comunicación, quienes constantemente están informando sobre las situaciones que acontece el país, y aunque se haga con el mayor profesionalismo o con el mayor amarillismo posible, se sigue informando a la comunidad, dejándole a cada habitante la libre opción de creer o no lo que le están comunicando.

Es por lo anterior, que la dificultad probatoria en relación con la comisión de los delitos de injuria y calumnia, cuando estos son cometidos por periodistas, va de la mano con la necesidad que tiene la sociedad de estar informada respecto de las actividades que realiza el personaje público, toda vez que de su comportamiento y decisiones depende el rumbo de vida de las personas cobijadas bajo su administración.

Por otro lado, el buen nombre es ante todo un concepto que se tiene de alguien es algo que se adquiere y para su adquisición, además del reconocimiento normativo en la Constitución, es necesario el mérito esto es la conducta irreprochable de quien aspira a ser su titular, lo que implica que quien lo desee defender deberá



haber mantenido un adecuado comportamiento que además debe ser debidamente apreciado por la colectividad

Por último, se puede establecer que realmente no es que exista un fuero para los periodistas, tal como se evidencia en el caso 4 donde fue condenado una persona por lanzar injurias contra otra, mas sin embargo, si existe una gran protección a la libertad de expresión, contempladas desde la Constitución de 1991 que no por nada es llamada la constitución de los derechos, ya que se desea ante todo apoyar, respetar y hacer valer los derechos de las personas, primando lo colectivo sobre lo particular.

Además, en el objetivo del presente estudio, también se determina que si bien es cierto el delito puede tener el mismo nombre en todos los casos, pues también se debe tener en cuenta que todos esos casos son diferentes y que las decisiones judiciales obedecerán a la gravedad de los hechos y a la verdad obtenida, por lo que no se puede generar un conclusión inflexible, aunque si se puede decir que existe una prioridad ante la libertad de expresión, mas sin embargo no es una obligatoriedad del estado por respaldar siempre la labor del periodista.

Asamblea Nacional Constituyente Normas en línea. Francia. Derechos del hombre y del ciudadano, artículo 11, del Título XII citado 18 de junio de 2014. Disponible en Internet: URL: <http://www.dabeiba.gov.co>

BORJA NIÑO, Manuel .La Prueba En El Derecho Colombiano. Tomo 1 Bucaramanga 1999. Diagramación e impresión, sistemas y computadores LTDA. Bucaramanga Colombia.

CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico De Derecho Usual, Ed. Heliasta S.R. L., Bs. Aires, 1986, tomo VII, pág. 309.

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley 599 de 2000. Bogotá: El Congreso, 2000. 151p

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley 906 de 2004. Bogotá: El Congreso, 2004. 185p.

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-554 de 2001. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-004 de 2003. M. P. Eduardo M. Lynett.

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-489 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-263 de 1998. M.P. Dr. Eduardo Cifuentes M.

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-102 de 1993. M.P Carlos Gaviria Díaz.

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-077 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-1319 de 2001. M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-028 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA, Sentencia C-010 de 2000. M. P. Alejandro Martínez Caballero.

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-494 de 2002. M. P: Jaime. Córdoba Triviño

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-063 de 1992. M. P. Eduardo Cifuentes.

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-299 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA, Sentencia C-616 de 1997. M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-227 de 2003. M. P. Eduardo Montealegre Lynett.

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA, Sentencia C-392 de 2002. M. P. Álvaro Tafur Galvis.

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-505 de 2000. M. P. José Gregorio Hernández Galindo.

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-882 de 2011. M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-532 de 1992. M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-401 de 1992. M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-011 de 1993. M.P. Alejandro Martínez Caballero.

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-499 de 1992. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-596 de 1992. M.P. Ciro Angarita Barón.

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-461 de 1998. M. P. Alfredo Beltrán Sierra.

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-958 de 2001. M. P. Eduardo Montealegre Lynett.

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-328 de 2001. M. P. Eduardo Montealegre Lynett.

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-650 de 2003. M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-293 de 1994. M. P. José Gregorio Hernández Galindo.

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-880 de 2005. M. P. Jaime Córdoba Triviño.

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-213 de 2009. M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-605 de 2006. M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-391 de 2007. M. P. Manuel José Cepeda Espinosa

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-411 de 1995. M. P. Alejandro Martínez Caballero.

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-611 de 1992. M. P. Alejandro Martínez C Y Fabio Morón.

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-559 de 1999. M. P. Alejandro Martínez Caballero.

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-1164 de 2000. M. P. José G. Hernández Galindo.

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-431 de 2004. M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-996 de 2000. M. P. Antonio Carbonel Barrera.

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-417 de 2009. M. P. Juan Carlos Henao Pérez.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIA. Sala de casación penal. Autos de 7 y 29 de marzo de 1994 M.P. Palacio Jorge Iván. Bogotá: La Corte, 1994.

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Decreto-Ley 4065 de 2011 Art. 16. Bogotá: El Congreso, 2011. 12p.

Fiscalía General de la Nación. Normas en línea. Bogotá: Noticias. Citado 10 de Julio de 2014. Disponible en Internet: URL: [http/ www.fiscalia.gov.co](http://www.fiscalia.gov.co)

Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2008, volumen III. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. pp. 135-150.

LOMBANA VILLALBA, Jaime. Injurias, Calumnias y Medios de Comunicación, Ed. Universidad del Rosario, 2009. v1. p 15-18

Organización de los Estados Americanos. Jurídico en línea. Estados Unidos. Convención Americana de DDHH citado 18 de junio de 2014. Disponible en Internet: URL: [http/ www.oas.org](http://www.oas.org)

Presidencia de la República de Colombia. En línea. Bogotá: avisos citado 10 de Julio de 2014. Disponible en Internet: URL: [http/ www.presidencia.gov.co](http://www.presidencia.gov.co)

RODRIGUEZ SANABRIA, Vladimir, Estudios Acerca del Honor Como Objeto de Protección Penal, Ed. Ibáñez, Bogotá, 2007. p. 25-35.

UPRIMNY YEPES, Rodrigo. La Piedra En El Zapato. En: Revista Cambio, Vol 2. Edición No. 510, del 7 de abril de 2003. P.15.